

Latinoamérica: En Búsqueda del Estado de Derecho y una Economía con Desarrollo Humano y Sostenibilidad Medioambiental

La pandemia del coronavirus ha generado un empobrecimiento general de las poblaciones alrededor del mundo. Los países industrializados han logrado aminorar el impacto debido a las fortalezas de sus economías y capacidad de ahorro, lo que les permitió hacer frente al cierre temporal de las economías y a los enormes e imprevistos gastos generados por el coronavirus. Los países en vías de desarrollo, mayormente endeudados, tuvieron que adquirir más deuda para hacerle frente a la pandemia, dejándolos en un estado de precariedad económica.

Y cuando se pensaba que en el 2022 se iniciaría el proceso de estabilización económica, Rusia decidió invadir Ucrania en febrero lo que provocó fuertes sanciones económicas impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países, generando un nuevo shock económico a nivel global. La invasión rusa paralizó las exportaciones de granos y fertilizantes de Ucrania, creando una escasez global. En suma, este conflicto bélico ha generado una inflación en todos los países, especialmente en áreas críticas como energía y alimentos.

Sin duda, las economías de los países de América Latina y el Caribe han sido fuertemente afectadas por estos sucesos, lo que a su vez ha generado estallidos sociales en varios países de la región, debido al empobrecimiento general de la población y la inadecuada capacidad de respuesta de los gobiernos.

Sin embargo, es bien conocido que antes de la pandemia, la región de América Latina y el Caribe ya venía sufriendo de altos e históricos índices de desigualdad social, causada por políticas gubernamentales dirigidas a proteger los intereses y privilegios de políticos egoístas y empresarios inescrupulosos que solo han practicado un capitalismo de amigos (crony capitalism en inglés) en lugar de un verdadero sistema económico de libre mercado.

Ciertamente, el deterioro general de las economías de los países, sumado a una inflación importada y la desigualdad social persistente, ha llevado a los ciudadanos en diferentes países a expresar su profundo y acumulado descontento con la ineficiente gestión de las estructuras de poder tradicional.

De hecho, los ciudadanos de la región han perdido la confianza en los sistemas políticos tradicionales, dando paso a que el discurso de los movimientos de izquierda tome fuerza en el electorado latinoamericano, dando como resultado la elección por la vía democrática de gobiernos izquierdistas en Chile, Perú, Colombia, y parece que Brasil también podría sumarse a la nueva ola ideológica que permea en Suramérica.

En realidad, la percepción generalizada de corrupción gubernamental, la falta de institucionalidad, un sistema de libre mercado distorsionado (capitalismo de amigos) y una justicia manipulada que no castiga a los corruptos públicos y privados de alto perfil (salvo en contados casos), son las principales causas de la debacle en las sociedades latinoamericanas.

La corrupción gubernamental es un robo de recursos de los pueblos que impide a los ciudadanos tener acceso a servicios básicos de seguridad, alimentación, educación, salud, vivienda, transporte, empleo decente, entre otros.

Considero que para resolver los problemas básicos de la población no hay que estar inventando la rueda o importando formulas ideológicas foráneas. Lo que se necesita es crear y creer en un **REAL** y **FUNCIONAL ESTADO DE DERECHO**, donde la corrupción gubernamental sea tipificada como **UN DELITO DE ALTA TRAICIÓN A LA PATRIA** y castigada de manera implacable con largos años de prisión; donde prevalezca una justicia independiente e imparcial y los presidentes, ministros y otros funcionarios públicos respeten y apliquen las leyes con rigor, actuando con transparencia y rindiendo cuentas de su gestión a la población.

La aplicación efectiva del **ESTADO DE DERECHO** garantiza que los actores económicos operen bajo las mismas reglas, sin privilegios ni favores especiales del gobierno y garantizando una verdadera y efectiva libre competencia y no un capitalismo de amigos, de la misma forma que el árbitro en un juego de fútbol garantiza que ningún jugador trastoque las reglas o reciba alguna ventaja sobre los demás.

Por otra parte, América Latina y el Caribe debe enfocar sus esfuerzos hacia el **DESARROLLO HUMANO**. Un país desarrollado no es el que tiene impresionantes y sofisticados rascacielos, edificios inteligentes o posee alta tecnología, sino aquel que ha podido **satisfacer las necesidades primarias de la población para disfrutar de una vida digna**.

En este sentido, un estado debe catalogarse como desarrollado cuando ha logrado proveer a toda a la población, o al menos a la mayoría, de servicios básicos y de calidad tales como, **SEGURIDAD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRANSPORTE, EMPLEO**, entre otros servicios necesarios para disfrutar de una vida decente. Ciertamente, no estoy diciendo nada nuevo y habría que agregar las infraestructuras de carreteras, electricidad, telecomunicaciones, acueducto, aguas servidas, disposición de basura, etc.

Sin embargo, la actual coyuntura debe llevarnos a cuestionar porque América Latina, luego de liberarse del yugo colonial hace 200 años, aún no ha podido proveer servicios básicos decentes a la población, manteniendo una persistente desigualdad social, y en consecuencia, una deficiente condición de vida humana, en una región que cuenta con una población relativamente joven y con talento humano para estar en el Primer Mundo.

Pienso que Latinoamérica, aunque ha heredado las instituciones del **ESTADO DE DERECHO**, la inmensa mayoría de los países aún no las han internalizado. Todavía no hemos logrado que la institucionalidad, que la obediencia y cumplimiento de las leyes sean parte de nuestra identidad nacional y de nuestro tejido social.

Al contrario, en muchos países de la región, “la coima”, “la mordida”, “el salve”, “el que hay pa’ mi” “el juega vivo” son prácticas sociales perniciosas arraigadas en la mentalidad de un número plural de personas desde altas posiciones de gobierno hasta servidores públicos de menor rango, influyendo negativamente en el comportamiento social.

Debido a esta mentalidad perniciosa y egoísta, mucha gente participa en la política con el fin de obtener alguna ganancia o beneficio personal del cargo público, favoreciendo a familiares, amigos, empresarios o clientes electorales en violación de la ley.

En América Latina no importa si el país opera bajo una ideología de derecha o de izquierda, ya que el cuadro de pobreza general es observable en ambos extremos, pero es más profundo donde el estado controla todos los medios de producción. En los países que se consideran capitalistas, el denominador común y raíz de la pobreza ha sido la falta o debilidad institucional, así como el uso de la estructura gubernamental en beneficio de grupos poderosos que controlan los medios económicos o de producción del país.

En verdad, las necesidades de los pueblos no son un asunto de ideología o filosofía de gobierno sino un tema de proveer servicios básicos y eficientes a la población. Es un asunto operacional, de funcionamiento del aparato gubernamental para atender esas necesidades.

Para organizar los servicios básicos de la población no se necesitan más estudios ni consultorías internacionales. Los pueblos latinoamericanos ya saben dónde está la solución, y además, cuentan con el talento y capacidad para resolver sus propios problemas. Solo necesitan gobiernos transparentes que funcionen y se enfoquen en resolver los problemas **BÁSICOS** de los ciudadanos. Como bien decía el estadista y filósofo inglés, Edmund Burke, la administración del estado es una **CUESTIÓN PRÁCTICA**, no un ejercicio intelectual o abstracto o lleno de discursos politiqueros vacíos.

Pienso que, luego de 200 años de vida independiente, ya es hora de que Latinoamérica transite hacia la aplicación real y efectiva del **ESTADO DE DERECHO**, que es el estado de civilización que nos separa de la selva, del caos y la anarquía. Solo un **ESTADO DE DERECHO**, donde gobierne la ley, donde la justicia funcione de manera imparcial, hará posible que en Latinoamérica existan sociedades más equitativas y prósperas, reduciendo sustancialmente el flagelo de la corrupción, y su consecuencia directa: la pobreza de la población.

Asimismo, ya es hora de que Latinoamérica evalúe y analice la posibilidad de implementar modelos económicos que han resultado exitosos tales como la **ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO** practicada en Alemania y los países nórdicos o la **ECONOMÍA DESARROLLISTA DE MERCADO** como vemos en Japón y otros países del Asia. El diseño del sistema económico también debe priorizar la **SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE** ante la amenaza existencial que representa el Cambio Climático.

Los modelos económicos arriba mencionados están enfocados en el **DESARROLLO HUMANO**, por lo que han generado un crecimiento económico más equitativo. También han establecido los mecanismos necesarios para evitar la excesiva acumulación de riqueza en unas pocas manos, han reducido las desigualdades sociales y han desarrollado políticas para reducir el impacto de la actividad humana en el medio ambiente.

De pequeño, mi padre me enseñó que para avanzar en la vida tenemos que aprender de los mejores. Gracias a esa premisa básica, la cual adopté como principio de vida, pude alcanzar un mejor nivel de desarrollo personal y profesional. La enseñanza de mi padre también aplica para los estados.

Además, pienso que se debe adoptar una nueva metodología para medir el progreso de los países de nuestra región y del mundo. Hasta ahora hemos observado a organismos internacionales enfocando las realidades socioeconómicas de los países desde la óptica del crecimiento económico,

en lugar de priorizar el **DESARROLLO HUMANO**. Ya es hora de medir el progreso de las naciones en función del número de personas con acceso a servicios básicos y eficientes, con el fin de lograr una medida justa del desarrollo socioeconómico de los pueblos.

Aunque la mayoría de los países latinoamericanos han experimentado históricas desigualdades sociales y el virus de la corrupción gubernamental que las genera, mantengo cierto optimismo al observar varios países de la región que están haciendo serios esfuerzos para mantener la institucionalidad y contener la corrupción, contra viento y marea, manteniendo un alto grado de madurez política, y más importante, la estabilidad social.

Dr. Ritter Diaz
Consultor Internacional
Tokio, 29 de agosto de 2022

Notas:

Este artículo de opinión es alimento para el pensamiento, para generar reflexión y debate. Y ciertamente, no soy dueño de la verdad, pero sí de mis opiniones. Las críticas constructivas y las opiniones honestas sobre este artículo son muy bienvenidas para mejorar mi pensamiento.

Mi agradecimiento a Ayana Diaz Hatada por la traducción del artículo al japonés.